

## REPÚBLICA DE COLOMBIA



### RAMA JUDICIAL

### TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

### SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

**Medellín, veintidós (22) de junio de dos mil veintidós (2022)**

Cumplido el traslado respectivo, se procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario de doble instancia instaurado por MIGUEL ANGEL GUARIN CIRO en contra de COLPENSIONES (Radicado 05001-31-05-019-2020-00160-01).

### ANTECEDENTES

Depreca el demandante, previa declaración de que es beneficiario del régimen de transición pensional bajo el amparo del Decreto 758 de 1990 y lo dispuesto por la sentencia SU 769 de 2014 y SU 057 de 2018, se condene a la accionada a reconocerle y pagarle el reajuste pensional, conforme a lo dispuesto por el Decreto 758 de 1990, teniendo en cuenta para ello los tiempos públicos servidos al Ministerio de Defensa -Policía Nacional-; la indexación y las costas del proceso.

Lo anterior, lo sustentó así: Nació el 20 de abril de 1934, por lo que tenía cumplidos 59 años al 1° de abril de 1994 y 1254 semanas cotizadas, siendo beneficiario del régimen de transición; mediante Resolución No. 002517 de 1996 el otrora ISS le reconoció la pensión de vejez en aplicación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el Decreto 758 de 1990, obteniendo un IBL de \$42.222 para una mesada pensional de \$98.700, a partir del 20 de abril de 1994, teniendo en cuenta un total de 587 semanas de cotización y sin

considerar tiempos públicos; laboró al servicio del Ministerio de Defensa -Policía Nacional en el período comprendido entre el 16 de julio de 1963 al 11 de junio de 1976; el 2 de agosto de 2018 solicitó a la accionada la reliquidación de la pensión de vejez incluyendo los tiempos laborados en la Policía Nacional, de conformidad con la sentencia SU 769 de 2014; Colpensiones mediante Resolución SUB 321591 de diciembre de 2018, procedió a reliquidar la prestación de vejez acogiendo la sumatoria de tiempos públicos y privados pero bajo los postulados de la Ley 71 de 1988, desconociendo que la norma más favorable era el Decreto 758 de 1990; al momento de realizar la liquidación, la entidad consideró un total de 1254 semanas, calculando un IBL de \$227.317 para el 20 de abril de 1994, aplicándole una tasa de reemplazo del 75%, arrojando una mesada pensional de \$944.243 para el año 2015, la cual resulta deficitaria respecto del monto que hubiera obtenido si se le hubiera aplicado el Decreto 758 de 1990, puesto que alcanzaría una tasa de reemplazo del 90%, que le arrojaría una mesada pensional de \$204.585; agotó la reclamación administrativa.

Mediante auto del 31 de agosto de 2020, el juzgado de conocimiento dio por no contestada la demanda por parte de Colpensiones.

El Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 14 de mayo de 2021, resolvió condenar a Colpensiones a pagarle al demandante la suma de \$122.294.996 por concepto de reajuste pensional, liquidado entre el 20 de abril de 1994 y el 30 de abril de 2021, la cual deberá ser indexada al momento del pago efectivo, autorizando el descuento para el Sistema de Salud; así mismo, a continuar pagándole a partir del 1° de abril de 2021, una mesada pensional en cuantía de \$1.449.215. Por último, le impuso las costas a Colpensiones, fijándole como agencias en derecho la suma de \$9.000.000

Inconforme con la decisión, interpuso el recurso de apelación el apoderado de la convocada a juicio, manifestando que al momento de reajustarle la mesada pensional mediante la Resolución SUB 321591 de diciembre de 2018, se le realizó el estudio normativo que le resultaba aplicable encontrando que era la Ley 71 de 1988, con una tasa de reemplazo del 75%, y no el Decreto 758 de

1990, con una tasa de reemplazo del 90% y, siendo así, solicita la revocatoria de la sentencia.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

### CONSIDERACIONES

Previo a lo que corresponde, importa resaltar que, en esta instancia, se encuentran por fuera de discusión, los siguientes presupuestos fácticos: /) El demandante nació el 20 de abril de 1934; //) le fue reconocida mediante Resolución No. 002517 de 1996, una pensión de vejez a partir del 20 de abril de 1994 en cuantía de \$98.700, teniendo en cuenta para ello un total de 587 semanas cotizadas y un ingreso base de liquidación de \$42.222; ///) mediante Resolución No. SUB 321591 del 10 de diciembre de 2018, le fue reajustada la mesada pensiones a partir del 2 de agosto de 2015 en cuantía de \$944.243, en aplicación de la Ley 71 de 1988, para lo cual se tuvo en cuenta un total de 1254 semanas entre tiempo público y privado, un IBL de \$227.314 para la fecha del estatus de pensionado, y una tasa de reemplazo del 75%; /V) de la Resolución SUB 321591 de 2018, se desprende que el demandante prestó sus servicios a la Policía Nacional entre el 16 de julio de 1963 y el 11 de junio de 1976, para un total de 4646 días, equivalente a 663.71 semanas, las que al sumarle las semanas cotizadas a la accionada, alcanza en total 1254 semanas.

Con la claridad que brindan los anteriores elementos, corresponde a la Sala dilucidar si procede o no la reliquidación de la mesada pensional del demandante, lo que dependerá de si es posible o no, en el marco del Decreto 758 de 1990, sumar los tiempos privados con tiempos públicos cotizados o no al entonces Instituto de los Seguros Sociales. Igualmente, por el grado jurisdiccional de Consulta que se surte en favor de Colpensiones, se determinará si hay lugar a la indexación, y si la demandada debe asumir o no las costas de la primera instancia.

Pues bien, el artículo 36 de la Ley 100, consagró la denominada *transición*, según la cual, cumplidas ciertas condiciones, sus beneficiarios acceden al derecho pensional, bajo las normas del régimen al que venían afiliados, en tres tópicos: edad, tiempo de servicios o número de semanas cotizadas, y monto (entendido como tasa de reemplazo o retorno).

Entre las normas anteriores a la Ley 100, se encuentra las Leyes 33 de 1985, 71 de 1988 y el Decreto 758 de 1990. En los dos primeros reglamentos, tienen un papel importante los tiempos de servicio en el sector público; en la Ley 33, con dos décadas de estos, se logra la prestación; al paso que en la Ley 71, su cómputo con semanas cotizadas, permiten acceder a la subvención por vejez, al completar entre unas y otras, 20 años. Esto, no ocurría con quienes aspiraban a la aplicación ultractiva del Decreto 758, toda vez que la jurisprudencia nacional, interpretaba el artículo 12 de ese compendio, en el sentido que, para lograr la pensión bajo los lineamientos de ese estatuto, solo era posible tener en cuenta los tiempos efectivamente cotizados al extinto ISS. A guisa ilustrativa pueden consultarse las sentencias SL16104 de 2014, SL 16086 de 2015, y SL16810 de 2016.

Dicho panorama se fue transformando a partir de las sentencias T-090 y T-398, ambas de 2009, en las que la Corte Constitucional interpretó el referido artículo, en el entendido que su tenor literal, no impide incluir para la causación de la pensión de vejez, los tiempos públicos cotizados o no al ISS. Aunado a que el régimen de transición, solo previó la aplicación de las normas anteriores en los tres elementos ya vistos, ninguno de los cuales hace alusión a los tiempos (públicos o privados) que se incluyen o no para la consolidación del derecho pensional, por lo que para resolver ese aspecto, debe acudir al literal f del artículo 13 de la Ley 100, que posibilita sumar períodos de labor en los sectores públicos y privados.

Hermenéutica a todas luces favorable, que tomó más fuerza cuando se profirieron las providencias de unificación SU 769 de 2014 y SU 057 de 2018. En ambas, el máximo intérprete de la Carta Política, reiteró que la intelección explicada, es la que debe aplicarse cuando se cuestione la posibilidad de la

sumatoria en comento para las pensiones del Decreto 758, por ser la que en mejor proporción garantiza el efectivo goce de derechos fundamentales de alto raigambre, como la seguridad social.

Estas últimas decisiones, versaron sobre asuntos en que solo mediante la sumatoria planteada, los accionantes adquirirían la pensión de vejez, por esa razón, este cuerpo colegiado era del criterio que únicamente, cuando se estuviera en ese escenario, era posible acumular en el estatuto del seguro social, los periodos servidos en el sector público, lo que excluía los casos de reliquidación o reajuste.

Criterio que fue recogido por esta Sala de Decisión, para en su lugar, como lo hacían otras salas de decisión del Tribunal, predicar que aun cuando se depreque el reajuste o reliquidación, es posible la sumatoria plurimentada en el Decreto 758, dado que a voces del artículo 4 de la Ley 169 de 1896, el órgano de cierre de esta jurisdicción ha proferido tres decisiones uniformes sobre un mismo punto de derecho. En efecto, en las sentencias SL1947, SL1981 y SL2557, todas de 2020, la Sala de Casación Laboral de la Corte, abandonó la tesis que impedía la suma de tiempos públicos y privados en ese decreto, y adocrinó que esto sí era posible, ya que, el régimen de transición no cobijó la forma de computar las semanas para lograr la pensión de vejez, por lo tanto, ha de aplicarse la posibilidad que en ese sentido otorga el literal f del artículo 13 de la Ley 100.

Esa interpretación del artículo 12 del Decreto 758 de 1990, irradia entonces no solo los procesos en los que se ruega la pensión de vejez, sino también su reliquidación, en la medida que como lo señaló el alto tribunal, en la última de las providencias enlistadas: *“...conforme al Acuerdo 049 de 1990 es viable acumular los tiempos de servicios públicos que cotizó la actora a otras cajas de previsión del sector público a efectos del reconocimiento de la pensión de vejez contemplada en dicho reglamento. De modo que tal criterio jurisprudencial también es aplicable al asunto en controversia, esto es, a la reliquidación de la pensión de vejez...”*.

Y es que para esta Sala, en ambos casos -cuando se solicita la pensión de vejez o su reliquidación-, se cuestiona la exegesis correcta del artículo 12 del Decreto 758 de 1990, y siendo que las altas cortes se encuentran de acuerdo en la posibilidad de sumar tiempos públicos y privados en ese precepto, no existe razón jurídica o fáctica para dejar a un de lado tal discernimiento en los casos de reajuste pensional.

En consecuencia, debe confirmarse este aspecto de la sentencia apelada, pues en el marco del Decreto 758 de 1990, es jurídicamente posible sumar tiempos públicos y privados, por lo que procede la reliquidación deprecada.

Resulta necesario indicar que no es tema de disenso la densidad de semanas cotizadas y servidas por el demandante en toda su vida laboral, que alcanzó un total de cuando menos 1254 semanas, densidad que en aplicación del artículo 20 del Acuerdo 049 de 1990 del CNSSO (Decreto 758 de 1990), le corresponde como tasa de reemplazo el 90%, tal cual lo dispuso el juez de instancia.

Ahora bien, revisada la liquidación efectuada por el *a quo*, debe decirse que existe un error en la determinación del valor del retroactivo entre el 20 de abril de 1994 y el 1° de agosto del año 2015, por cuanto este tuvo en cuenta todo el último año calendario, cuando lo real y efectivo era solamente hasta el 1° de agosto de ese año, dado el reajuste que le reconoció la entidad a partir del siguiente día, más la mesada adicional, que según el cuadro del juzgado representaría un total de 241 días y no 420 como allí aparece relacionado, por lo que el valor real por dicho periodo asciende a \$103.897.981, que al sumarlo con el retroactivo entre el 2 de agosto de 2015 y el 30 de abril de 2021 por \$16.576.097, genera como resultado la suma de \$120.474.078, pues téngase en cuenta que no es motivo de disenso el IBL calculado por la entidad en la Resolución SUB 321591 de 2018 en cuantía de \$1.258.990, sobre el que se aplicó como tasa de reemplazo el 90%, y el resultado se deflactó hasta el año 1994, conllevando que la mesada pensional que debió recibir el demandante para esa anualidad era por \$204.583, y en proporción a 14 mesadas pensionales al año y, siendo así, la mesada pensional que debe seguirle

reconociendo Colpensiones al demandante a partir del 1° de mayo de 2021 es en la suma de \$1.449.215, tal como lo ordenó el juez de instancia.

Respecto de la condena por indexación, debe decirse que en economías inflacionarias como la nuestra, el solo paso del tiempo genera una pérdida de valor en el dinero que debe ser compensada con el reconocimiento de dicha prestación, por lo que siendo que la obligación aún no se ha pagado, se hace necesario la confirmación de la sentencia en este asunto, en los términos descritos por el juez de instancia.

Cabe anotar que en el presente asunto no ha operado el fenómeno de la prescripción contenido en los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y el 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, toda vez que al tenerse por no contestada la demanda, no se formuló por la accionada este medio exceptivo, y en consideración a lo señalado por el artículo 282 del Código General del Proceso, aplicable por analogía al Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, por así disponerlo el artículo 145 de este último compendio normativo, la excepción de prescripción debe alegarse en la contestación de la demanda, es decir, debe ser rogada para poder ser analizada por el juzgador, pues la consecuencia que trae consigo la norma al no ser formulada es que *“cuando no se proponga oportunamente la excepción de prescripción extintiva, se entenderá renunciada”*.

Finalmente, las costas de primera instancia deberá asumirlas Colpensiones, por ser una condena que se asigna ante el criterio objetivo previsto en la ley, según el cual, estas deben imponerse a la parte que resulta vencida en juicio. Las costas de segunda instancia, igualmente serán a cargo de la pasiva, por haberse resuelto desfavorablemente el recurso de apelación. Se fijan como agencias en derecho un SMLMV.

#### **DECISIÓN:**

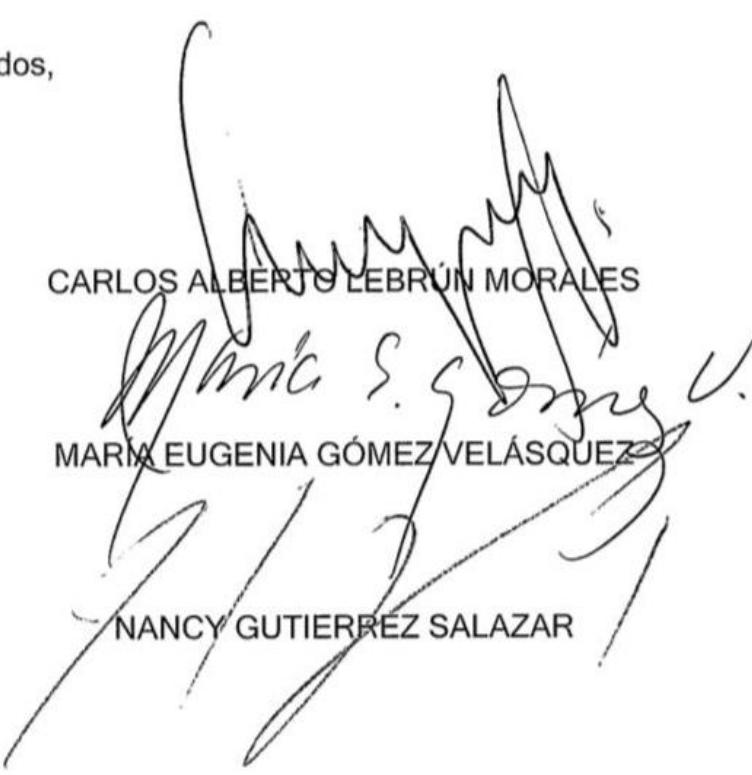
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por

autoridad de la Ley, MODIFICA la sentencia materia de apelación y consulta en cuanto al valor del retroactivo liquidado entre el 20 de abril de 1994 y el 30 de abril de 2021, quedando este en la suma de CIENTO VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y OCHO PESOS (\$120.474.078), conforme a lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia; y la **CONFIRMA** en lo demás.

Costas de esta instancia a cargo de Colpensiones, fijándole como agencias en derecho la suma de un (1) salario mínimo legal mensual vigente.

Notifíquese por edicto.

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES

MARIA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ

NANCY GUTIERREZ SALAZAR



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
SALA LABORAL



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

**Radicación:** 05001310501920200016001  
**Proceso:** Ordinario  
**Demandante:** MIGUEL ANGEL GUARIN CIRO  
**Demandado:** ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -  
COLPENSIONES EIC  
**M. P.** CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES  
**Fecha de fallo:** 22/06/2022  
**Decisión:** CONFIRMA Y MODIFICA

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 23/06/2022 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
Secretario